

## Informe Regional de Colombia: Magdalena Medio



Bogotá, 28 de agosto del 2003

### El impacto de la fumigación aérea en el Sur de Bolívar<sup>1</sup>

Durante finales de mayo y gran parte de junio del 2003, aviones de fumigación volaron sobre la parte sur del departamento de Bolívar en el corazón de Colombia, fumigando de manera indiscriminada vastas junglas, pastizales, viviendas rurales y cultivos lícitos e ilícitos con el químico glifosato. Las víctimas de esta acción están enfurecidas y se oponen de manera acérrima a la feroz campaña de fumigación que ha provocado una crisis alimentaria en la población rural. Muchos líderes se han quejado y han pedido se investiguen los daños. En respuesta, varios ONG y organismos internacionales<sup>2</sup> decidieron enviar una misión al municipio de San Pablo, cerca de la Serranía de San Lucas, para verificar el impacto de las más recientes fumigaciones<sup>3</sup>.



### La industria de la coca en el Sur de Bolívar

La coca hizo su primera aparición durante la década de los años 80, teniendo como telón de fondo la fuerte presencia de actores armados<sup>4</sup>, una presencia

<sup>1</sup> El sur de Bolívar se ubica en el sur del departamento de Bolívar.

<sup>2</sup> Programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio, Comité Central Menonita, Diócesis de Barranca, Servicio Jesuita para Refugiados, la Defensoría del Pueblo de Barranca y Testigos por la Paz, Consejería en Proyectos.

<sup>3</sup> La misión de verificación visitó las comunidades rurales de Virgencita, la vecina Agualinda y Pozo Azul. Las conclusiones se basan en lo que la misión observó durante la visita y entrevistas con campesinos locales en julio del 2003.

<sup>4</sup> *Historia de los actores armados irregulares en el Magdalena Medio*: En 1965 se fundó el antiimperialista Ejército de Liberación Nacional (ELN) en oposición al régimen político de la época. En las décadas de los años 80 y 90, el proyecto político militar del ELN influyó de manera significativa en grandes áreas del Magdalena Medio. Sin embargo, la ofensiva de las unidades paramilitares de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) dirigida a tomar el control de la región, debilitó significativamente al ELN el que perdió su dominio en muchos de los territorios. En respuesta a las invasiones paramilitares a gran escala, el ELN fue poco a poco buscando refugio en las montañas de la Sierra de San Lucas. Durante la década de los 90, las FARC llenó hasta cierto punto el vacío que dejó el ELN. Desde el fin de la guerra fría, las fuerzas guerrilleras han requerido un financiamiento considerable para poder ejercer su autoridad en la región. Por lo tanto, aunque en un inicio desalentaron a las comunidades rurales a que cultivaran coca, hoy lo están promoviendo de manera activa e impusieron un impuesto sobre dicho cultivo. Las AUC ocuparon muchas zonas urbanas y rurales durante la década de los 90, y en gran parte de la región controlan la economía de guerra (es decir las economías de la coca, el petróleo y el oro). La forma de operar de los paramilitares consiste en asesinar a líderes sindicales y de base, y en amenazar y eliminar a potenciales

del Estado históricamente débil y, en particular, una próspera economía de guerra (basada en las industrias de la coca, el petróleo, el oro y las esmeraldas). Antes de que la coca entrara en escena, los campesinos subsistían con la producción agrícola, el lavado del oro, la explotación de la madera y el engorde de ganado. Hoy, la mayoría de los agricultores y sus familias dependen del ingreso del cultivo de la hoja de coca, la que se produce en la mayoría de los municipios del Sur de Bolívar, pero en particular, en los municipios de Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa, y Simití.

**El cultivo de la coca en municipios selectos del Sur de Bolívar:**

Municipios del Sur de Bolívar <sup>5</sup>	1999	2000	2001	2002
CANTAGALLO	1904.51	1268.56	1063.40	446.00
SAN PABLO	1438.09	1248.95	1189.72	614.00
SANTA ROSA DL SUR	1441.40	1578.72	1907.35	996.00
SIMITI	869.03	821.28	1382.20	321.00
<b>Total del cultivo de la coca en el departamento de Bolívar</b>	<b>5897.01</b>	<b>5960.04</b>	<b>4823.97</b>	<b>2735.00</b>

Aunque en esos municipios el cultivo de la coca ha bajado notablemente desde el inicio del Plan Colombia, la campaña de fumigación impulsada por los gobiernos de Estados Unidos y Colombia no debe verse como un éxito. *“En total, en los últimos 15 años, el cultivo de la coca en la región andina se ha mantenido en unas 200,000 hectáreas, debido a que las políticas antinarcóticos sólo han logrado empujar la producción hacia otros departamentos o países vecinos y de regreso a previas localidades. El impacto de los Estados Unidos es cuando mucho marginal. El Departamento de Justicia reportó en enero que la disponibilidad de cocaína sigue siendo “estable”<sup>6</sup>.*



El principal obstáculo para la erradicación exitosa de la coca es que los enfoques de la zanahoria y el garrote que utiliza el gobierno con la fumigación y los programas de desarrollo alternativo, no responden a la complejidad de las situaciones locales, con su extremadamente mala infraestructura, con la presencia de grupos armados – FARC, ELN y AUC – que a menudo imponen bloqueos económicos y alimentarios a la población local, y una presencia históricamente débil por parte del Estado.

simpatizantes de la guerrilla, junto con alcaldes, concejales y líderes políticos que luego pueden reemplazarse con individuos serviles. Últimamente, una AUC cada vez más fragmentadas y con un interés predominante en la economía de guerra a expensas del control de los territorios y sus poblaciones, ha puesto en peligro el proyecto paramilitar de consolidar el control regional. El movimiento guerrillero se ha aprovechado de las divisiones internas de las AUC para poco a poco volver a ocupar partes de Barrancabermeja y vastos territorios rurales.

<sup>5</sup> Fuente: SIMCI (Proyecto Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos) @ [www.cultivosilicitoscolombia.gov.co/aux\\_estadisticas1.htm](http://www.cultivosilicitoscolombia.gov.co/aux_estadisticas1.htm)

<sup>6</sup> Oficina de los EE.UU. en Colombia, Washington D.C. (publicado en The New Republic el 28 de Julio del 2003); las cifras también las dio el Transnational Institute (TNI).

El aislamiento geográfico es un problema. Es difícil llegar a las áreas rurales dadas las malas condiciones de los caminos y los altos costos de transporte. Entre otros factores, la falta de caminos transitables hace que algunas áreas rurales sean extremadamente inhóspitas para los cultivos comerciales legales. Por ejemplo, el costo de transportar una carga de yuca al centro urbano más cercano en San Pablo – apenas a 30 Km. de distancia de Virgencita – es de 20,000 pesos mientras que la yuca como tal sólo se vende en 30,000 pesos en el mercado lo que le deja a la familia unos 10,000 pesos o aproximadamente 3 dólares (sin incluir los costos del cultivo y la cosecha). Mientras que los productos agrícolas tradicionales son muy costosos de producir y prácticamente no tienen ninguna ganancia, la pasta de coca es fácil de transportar y paga suficiente para vivir.

La presencia de actores armados irregulares tiene una serie de consecuencias: (1) socava la erradicación manual de los cultivos de coca, (2) impone impuestos en las hojas y la pasta de coca, y bloqueos en las carreteras, y (3) debilita las estructuras sociales. Los actores armados han adoptado una actitud hostil hacia la sustitución de cultivos y el desarrollo rural. Los productores locales informaron a la misión que habían recibido amenazas y se les aconsejó que no estuvieran de acuerdo con la erradicación manual, lo que aseguraría un desarrollo alternativo en la región. Los actores armados estigmatizan y explotan a los agricultores, practican el saqueo de ganado y alimentos, e imponen de manera creciente bloqueos económicos y alimentarios. De hecho, las frecuentes restricciones en el movimiento y el comercio significa que este último es casi imposible de practicar en la región.

*“Aquí se saca muy poco, si tiene comercio pero lo que vale una carga de maíz no le da a uno...Vienen a estos sitios para comprar coca, en cambio maíz no...Los grupos armados nos bloquean la carretera y nosotros nos quedamos aquí ajustando la carrera aguantando hambre”.<sup>7</sup>*

Las crecientes restricciones en el comercio y las migraciones han desalentado a los campesinos a invertir en actividades tradicionales como la cría de ganado, promoviendo, por el contrario, el cultivo de la coca. Además, la presencia de los grupos paramilitares y guerrilleros ha debilitado las estructuras sociales. Los líderes comunitarios, en particular, han sido víctimas de sistemáticas desapariciones, masacres y desplazamientos forzados.

La falta de bienestar social y de servicios básicos ha empujado a muchos campesinos a optar por la economía de la coca. Los líderes comunitarios locales insisten continuamente en que se otorguen fondos para mejorar los caminos, que se creen planes de empleo, escuelas y servicios de salud, pero hasta el momento las autoridades regionales no han respondido a sus

---

<sup>7</sup> Entrevista con un campesino.

demandas, según lo manifestaron los líderes campesinos del área rural de San Pablo. Las comunidades campesinas se sienten criminalizadas por el Estado que las tilda de simpatizantes de la guerrilla y de productores de coca. La fumigación aérea y la falta de inversión socioeconómica, lejos de eliminar el cultivo de la coca, está alimentando los sentimientos contra el gobierno, especialmente en las áreas controladas por la guerrilla.

### **La misión de Uribe contra la droga**

La fumigación aérea<sup>8</sup> inició el 24 de mayo del 2003 en el municipios de San Pablo. Esta es la tercera vez que se hace una fumigación aérea con herbicida en la región (según datos del SIMCI, durante el 2001, se fumigaron unas 11,000 ha. de coca en el departamento de Bolívar)<sup>9</sup>. Durante las dos últimas fumigaciones, la población recibió paquetes de ayuda humanitaria por parte del gobierno, los que duraron unos tres meses. La intensidad de la fumigación y la concentración de los químicos es diferente esta vez, insisten los habitantes locales. Durante finales de mayo y gran parte de junio, los helicópteros volaban todos los días sobre el municipio de San Pablo, fumigando los cultivos de manera indiscriminada. La mayoría de las familias en Agualinda perdieron sus cultivos de coca y de alimentos, pero nadie ha recibido ayuda alguna hasta la fecha. Las familias se están quedando sin alimentos.

La mayor parte de la coca se cultiva entre cultivos legales, aunque a veces se cultiva por separado. La misión encontró que después de la fumigación, los cultivos de coca a menudo sobreviven mientras que las cosechas lícitas eran mucho más fáciles de eliminar con el glifosato. En algunas áreas, se fumigaron los campos de maíz, aun cuando no había coca cerca. Aún se desconoce cuantas personas resultaron afectadas en el área, pero una reciente misión al valle de Cimitarra, un poco al sur de San Pablo en el departamento de Santander, donde se fumigaron más de 400 hectáreas de tierra, estableció que alrededor de la mitad de la tierra estaba cubierta por bosques, pastizales y rastrojo de las cosechas, otro 40% con productos agrícolas lícitos y sólo un 1.5% con cultivos de coca. Hubo no menos de 114 víctimas de la fumigación.

La fumigación aérea forma parte del Plan Colombia, que ha sido muy controvertido y supremamente cuestionado desde un inicio, así como sujeto de manera constante a estudios, evaluaciones y críticas tanto dentro<sup>10</sup> como fuera de Colombia<sup>11</sup>. A pesar de esas controversias, el presidente Uribe volvió a

<sup>8</sup> En las campañas de fumigación se utiliza una formula especial de barrida. A principios del 2003 se aumentó la cantidad de glifosato, el componente activo de la mezcla, de ocho a diez litros por hectárea.

<sup>9</sup> Esto es un tanto contradictorio dado que SIMCI registró unas 4,800 hectáreas de cultivos de coca en el departamento durante el 2001.

<sup>10</sup> La Defensoría del Pueblo, la fiscalía, la contraloría, las organizaciones de derechos humanos, los movimientos campesinos e indígenas regionales, y los académicos como Ricardo Vargas, han presentado constantes quejas desde que se lanzó el Plan Colombia en el 2000.

<sup>11</sup> La Oficina General de Contabilidad, ciertos comités del Congreso de los EE.UU., y el Centro de Políticas Internacionales (CIP), entre otros, también han manifestado su oposición.

reanudar la fumigación en octubre del 2002, tras un alto temporal producto de un llamado de la defensoría a que se investigara el impacto del Plan Colombia en la salud pública.

La intención de Uribe es fumigar todas las áreas donde se cultiva la coca a fin de erradicar la producción y el tráfico de la droga para el 2006; la determinación del gobierno está planteada en el más reciente *‘Plan de Seguridad Democrática’*<sup>12</sup>. La meta este año es la fumigación de un área de 200,000 hectáreas, dos veces la cantidad de los cultivos existentes<sup>13</sup>, y Uribe está ahora fumigando intensamente para cumplir su meta. La región del Magdalena Medio tiene unas 30,000 hectáreas de tierra sembrada de coca, de las cuales se fumigarán 10,000 en lo que resta del año. La fumigación también se ha convertido en un instrumento para combatir a los grupos insurgentes —la guerra contra las drogas y el terrorismo están vinculadas, según los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia— para así volver a establecer el control del Estado sobre sus regiones y manejar nuevamente sus recursos económicos.

Para cumplir con el objetivo de una total erradicación, el gobierno diseñó una estrategia multifacética que combina la fumigación aérea, la detención de las redes de traficantes de la droga, la inversión socioeconómica y los programas de desarrollo alternativo. El plan establece que los campesinos que deseen beneficiarse de los proyectos de sustitución de la droga deben comprometerse a la erradicación total de cultivos ilícitos (*Política de Defensa y Seguridad Democrática*, 2003). El problema es que a menos que se implementen programas de desarrollo rural alternativos al nivel nacional antes de la erradicación de la coca, los cultivos ilícitos seguirán moviéndose hacia otras áreas rurales empobrecidas por todo Colombia y la región andina. Aunque el gobierno tiene fondos del Plan Colombia disponibles para programas sociales, cuyo objetivo es facilitar y promover la erradicación de los cultivos ilícitos (es decir fondos para ayuda de emergencia y programas de desarrollo alternativo), hasta la fecha no se ha invertido nada para brindar ayuda a la población local del área rural de San Pablo.

### Consecuencias e impactos de la fumigación

La fumigación aérea ha venido a exacerbar las dificultades económicas, ha ocasionado una crisis humanitaria y también ha significado que muchas personas se han visto obligadas a abandonar el área. Durante mucho tiempo se ha cuestionado el impacto que tienen las políticas de fumigación en la seguridad alimentaria, el medioambiente y la salud, así como su relación con el desplazamiento forzado. Aunque se han hecho amplios estudios



<sup>12</sup> El plan salió a luz pública en junio del 2002 y está disponible en [www.presidencia.gov.co](http://www.presidencia.gov.co)

<sup>13</sup> El proyecto SIMCI de la oficina de la ONU sobre Drogas y Crímenes (UNODC) estima un total de 102,000 hectáreas de coca durante el 2002, una reducción de las 144,800 que existían en el 2001 (cifras de SIMCI). Pero las autoridades antinarcóticos de EE.UU., estiman que en Colombia el cultivo de la coca bajó de 169,800 hectáreas en el 2001 a 144,450 en el 2002 (fuente: TNI)

sobre el impacto de la fumigación aérea<sup>14</sup>, los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia no han tomado en cuenta esas evaluaciones.

La fumigación de cultivos legales e ilícitos ha dejado un paisaje con manchas amarillas de platanales podridos y de campos de maíz, yuca, arroz y también de coca, completamente secos. Es irónico que en algunos casos los cultivos de coca sobrevivieron intactos tras la fumigación a pesar de que, a inicios del 2003, el gobierno aumentó la concentración de glifosato de 8 a 10.4 litros por hectárea. Gran parte de las tierras agrícolas quedaron estériles, al menos temporalmente, dicen los campesinos. La devastación de las cosechas y del ganado ha creado escasez de alimentos y desnutrición, por lo menos en el área rural de San Pablo. Algunos campesinos sostienen que ya no pueden enviar a sus hijos a la escuela debido a que no pueden brindarles un desayuno. De la noche a la mañana, los campesinos han perdido todos sus ingresos provenientes de actividades lícitas e ilícitas. El área rural de San Pablo se está convirtiendo poco a poco en un cinturón de hambre donde pobladores famélicos sobreviven consumiendo productos agrícolas contaminados con glifosato.



El gobierno insiste en que el glifosato no es dañino y que incluso es seguro beberlo en grandes cantidades, pero los pobladores han experimentado efectos adversos para la salud como consecuencia directa de la fumigación aérea. La población local reporta síntomas que incluyen erupciones cutáneas, vómitos, fiebre, mareos y diarrea. Los niños han sido los más afectados. Un miembro del hospital de San Pablo explicó que desde que iniciaron las fumigaciones, se han atendido en el hospital cada día entre tres y cuatro personas intoxicadas con glifosato. Las personas han reportado suministros de agua contaminados y han expresado preocupación sobre el impacto en la industria pesquera y sobre el consumo de

agua contaminada.

La inmensa mayoría de la “población migrante” de jóvenes muchachos trabajadores o *raspachines*, que antes trabajaban en el área rural de San Pablo ha abandonado la región tras la fumigación en busca de trabajo en otras regiones coqueras. La mayoría de los minifundistas han permanecido en el área, pero muchos temen que es sólo cuestión de tiempo antes de que agoten sus mecanismos de supervivencia. Muchos de ellos ya se han endeudado y se han visto obligados a vender su ganado y otras pertenencias apenas para sobrevivir y ahora no tienen fondos para volver a empezar a cultivar las

<sup>14</sup> Véase por ejemplo: Elsa Nivia: *Efectos sobre la salud y el ambiente de herbicidas que contienen glifosatos*; y Jeremy Bigwood: *Resumen de la literatura científica con respecto a los efectos nocivos de formulaciones que contienen glifosato en biotas acuáticas y suelos* (fuente: [www.accionecologica.org](http://www.accionecologica.org)). Numerosos estudios científicos pueden también encontrarse en [www.amazonalliance.org](http://www.amazonalliance.org) y [www.mamacoca.org](http://www.mamacoca.org)

cosechas alimentarias. La infertilidad de la tierra causada por el glifosato impide que crezcan nuevos cultivos. Los campesinos temen que tendrán que abandonar sus hogares si en un futuro próxima hay más fumigaciones. Los campesinos también afirman que debido a la falta de opciones alternativas, se verán obligados a trasladar el cultivo de la coca a las junglas despobladas del sur de Bolívar, contribuyendo así a la destrucción de la ecología colombiana.

### **Proyectos de desarrollo alternativos**

Sin ayuda humanitaria ni de desarrollo alternativo<sup>15</sup>, las familias afectadas pronto podrán verse en una situación de hambruna, o también podrían optar por reubicarse en otro lugar, cortar unas cuantas hectáreas más de árboles y sembrar más coca. Se necesita asistencia humanitaria inmediata para disminuir el impacto negativo de la fumigación aérea, pero la ayuda por sí sola no puede ofrecer un desarrollo alternativo económicamente viable. Se precisa de intervenciones diplomáticas y políticas para apuntalar las iniciativas de paz.

Muchos campesinos locales en el área rural de San Pablo han expresado preocupación ante las estrategias radicales que exigen que los campesinos eliminen todas las plantaciones de coca sin tener cultivos sustitutos para asegurar un ingreso sostenible a las familias campesinas. Muchos han sugerido la necesidad de introducir cultivos agrícolas sostenibles, como el cacao y el café entre otros, y tras su introducción ir poco a poco erradicando los cultivos de coca de forma manual. Asimismo, los campesinos le manifestaron a la misión que les preocupan las alternativas que se les han propuesto. Se mostraron particularmente recelosos de las propuestas forestales, que consisten en proyectos de generación de ingresos dirigidos a sembrar nuevos bosques para usos comerciales. La principal crítica es que los campesinos no ganarían lo suficiente para vivir. Los proyectos forestales no resuelven las causas subyacentes del mal funcionamiento de la economía campesina local. Lo que es más, la ayuda está condicionada al compromiso local con la total erradicación, antes de su implementación, y sin embargo, en estos momentos existe la urgente necesidad de llevar ayuda humanitaria y para el desarrollo a largo plazo.

---

<sup>15</sup> Los programas de desarrollo alternativo impulsados por el gobierno incluyen planes para la erradicación manual de los cultivos en los que los campesinos locales dispuestos a dejar de cultivar coca manera voluntaria reciben financiamiento, créditos y asistencia técnica para que cultiven cosechas legales. El gobierno también financia proyectos de infraestructura, como construcción de caminos. Government-led alternative development programs include manual eradication schemes, in which local farmers willing to give up coca voluntarily receive funding, credits and technical aid in order to cultivate legal crops. Estos proyectos han recibido muchas críticas, debido a que a menudo el Estado no cumple lo prometido y deja a los campesinos sin ingresos ya sea de cultivos legales o ilegales..

## Ayuda para la recuperación: el papel de las agencias de ayuda internacionales

Los ONG, la iglesia y la defensoría del pueblo presentes en la misión de verificación, plantearon lo que podrían hacer para mejorar la situación de la población rural en el municipio de San Pablo.

- Ayuda humanitaria inmediata para impedir que sigan colapsando los mecanismos de supervivencia, lo que en última instancia conducirá al desplazamiento forzoso (La Consejería en Proyectos junto con el Servicio Jesuita para los Refugiados están discutiendo un posible plan de acción conjunto).
- Ayuda para presentar quejas: Aunque existe un sistema que permite que las víctimas de la fumigación —individuos y comunidades— presenten sus quejas, los procesos administrativos que se requieren no son fáciles de entender, y mucho menos para las comunidades. Las quejas son vitales para medir el grado de los impactos negativos de la fumigación aérea.
- Acompañamiento de las comunidades locales en sus esfuerzos por emplear estrategias participativas para abordar el problema de la coca, destacando las necesidades socioeconómicas y alentando la inversión socioeconómica por parte del gobierno local.
- Monitoreo de la crisis humanitaria a través de la promoción de más misiones a la región acompañadas de expertos (como expertos en salud), ONG internacionales y diplomáticos que puedan hablar sobre el tema de la fumigación. Existe de hecho la necesidad de fortalecer la incidencia política en Colombia, la región andina y los EE.UU., para destacar las controversias alrededor de la fumigación (es decir, la relativa estabilidad del cultivo de la coca en la región andina a pesar de las grandes sumas de fondos asignadas para la erradicación del cultivo, los impactos visibles en la población civil y el deterioro del conflicto armado). El Comité Central Menonita, por ejemplo, siempre está planteando ante el Congreso de los Estados Unidos, el impacto de la fumigación en Colombia.
- Al nivel regional, la Consejería en Proyectos está en el proceso de desarrollar un plan de protección para la región del Magdalena Medio. El plan tiene como objetivo proteger a las comunidades rurales que viven en las zonas de guerra, donde la población civil se ha visto cada vez más involucrada en la guerra y donde los bloqueos contra personas y bienes se han convertido en estrategias militares comunes<sup>16</sup>. El plan

<sup>16</sup> En el Magdalena Medio existen por lo menos seis casos de las llamadas comunidades bloqueadas: Micoahumado, La India, Landázuri, San Pablo, Cantagallo, Yondó, Valle de Río Cimitarra, Santa Rosa, y Cordillera Occidental. Estas comunidades están atrapadas en el fuego cruzado, obligadas a permanecer la zona de combate

busca cómo abrir corredores humanitarios, romper los bloqueos y restaurar las economías de mercado locales. La idea es identificar tres zonas de protección, como proyecto piloto, donde se implementará el plan, el que requiere los esfuerzos conjuntos de las agencias de la ONU, la iglesia, la defensoría del pueblo y las agencias de ayuda internacionales establecidas en la región.

*Fotografías: (1) Camino en el municipio de San Pablo; (2) maíz fumigado; (3) niño con erupciones cutáneas – tomadas por el equipo de PCS*

### **Consejería en proyectos en el Magdalena Medio:**

**La Consejería en Proyectos** (PCS) trabaja en el Magdalena Medio (MM) desde 1995. PCS trabaja en una serie de áreas en esta región: (1) ayuda humanitaria; (2) fortalecimiento de la capacidad local y (3) incidencia política. PCS trabaja en los centros urbanos de Barrancabermeja y San Pablo, y en las áreas rurales de Micoahumado en el municipio de Morales; La India en el municipio de Landazuri; y está empezando a trabajar en las áreas rurales de San Pablo.

- (1) A través de sus contrapartes locales, PCS apoya proyectos de seguridad alimentaria, fortalecimiento de la capacidad local y vivienda. PCS trabaja a través de una serie de organizaciones locales en el Magdalena Medio, como son la Diócesis de Magangué y Barrancabermeja, la Organización Femenina Popular (OFP), Asodesamuba (una organización social compuesta por unas 400 familias desplazadas), Fidhap (a cargo de mejoras a la vivienda), y la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC).
- (2) El fortalecimiento de la capacidad pone énfasis en el apoyo administrativo, organizativo y financiero. Por ejemplo, la Fundación “Mujer y Futuro” está realizando una consultoría para Asodesamuba, que se enfoca en la caracterización de la población desplazada asociada con esa organización social. Esto implicará hacer una evaluación de las necesidades de los asociados y fortalecer el proceso participativo dentro de Asodesamuba.
- (3) A la luz de la perpetuación del conflicto armado y la creciente falta de protección para la población rural en el Magdalena Medio, PCS diseñó un plan de protección para esa región a inicios de este año. El plan está dirigido a poblaciones rurales vulnerables que viven en las áreas bajo el control de los actores armados irregulares o las zonas en disputa, las que de manera constante enfrentan bloqueos económicos y de alimentos, y son sometidos al reclutamiento forzoso y a la estigmatización. La primera fase del plan —en ejecución— está dirigida a buscar alianzas con otras organizaciones presentes en la región (ACNUR, la Diócesis de Barranca y Magangué, El Servicio Jesuita par Refugiados y la oficina regional del Defensor del Pueblo). En un inicio, el plan se implementará en tres zonas rurales que están en proceso de identificación. Bajo el plan, se diseminarán principios y criterios humanitarios, se acompañará a las comunidades rurales y se monitoreará el desarrollo del conflicto armado y de la crisis humanitaria. El plan plantea la distribución de ayuda de emergencia en zonas de emergencia humanitaria,

sitiados o bloqueados por los grupos armados. A través de retenes la guerrilla o los paramilitares controlan el movimiento de personas y productos. Su presencia y la imposición de impuestos en los productos agrícolas y la coca socava por lo general las economías de mercado rurales.